

ESTADOCENTRISMO, NACIONALISMO E INCLUSIÓN

Año de mil novecientos
del treinta y ocho a contar
sucedió lo que enseguida
yo les vengo a relatar.
El día dieciocho de marzo,
fecha de gran sensación,
nacionalizó el petróleo
el jefe de la Nación.

Corrido petrolero

Entre 1929 y 1933 las economías latinoamericanas se derrumbaron como efecto de la gran crisis capitalista. La magnitud y entidad de la crisis obligó a la rearticulación de las relaciones entre Estado y sociedad. Probablemente el denominador común fue el abandono del canon liberal tanto en la economía como en la política.

Las soluciones emprendidas para rearticular las economías combinaron inicialmente el ensayo y el error, el eclecticismo y una importante dosis de pragmatismo. La inserción de esas economías en el patrón de la división internacional del trabajo como productoras de materias primas basada en las ventajas comparativas, mostraba crudamente su inviabilidad. Si bien al comienzo los estados apelaron a medidas anticíclicas ya antes ensayadas (disminución del gasto público y de los salarios, despidos, regulación del tipo de cambio, etc.) pronto se advertiría que ya eran anacrónicas para enfrentar un escenario que requería medidas más audaces. Así, a partir de 1933-1935 se apelaría a formas intervencionistas y fomentalistas que abandonaban el mercado,

el *laissez-faire*, y pusieran al Estado como el actor principal y protagonista de la organización no sólo económica sino social.

El colapso de Wall Street conmovió todas las economías de la región pero su impacto fue desigual así como también los ritmos de la posterior recuperación. Las economías centrales, receptoras de materias primas, respondieron frente a la crisis con el cierre de los mercados, la restricción del crédito, la contracción monetaria, incluso el abandono del patrón oro y la suspensión del pago de la deuda. La caída de los precios tanto de las importaciones como de las exportaciones fue vertiginosa, pero las materias primas cayeron más que las manufacturas. Por otra parte, se contrajo la demanda. El sentido y el volumen de los intercambios se modificaron sustantivamente.

Entre 1928 y 1932 los términos de intercambio cayeron alrededor de 44% en el conjunto de las economías latinoamericanas. Esto se ve agravado por la disminución del poder de compra de las exportaciones, que cae a más de la mitad en 1932 comparado con el año 1928. Sin embargo en Chile cae alrededor de 83% y en Argentina o Brasil, alrededor de 25%. Una excepción es Venezuela, donde a pesar de la caída de los precios del petróleo, la renta petrolera hizo posible no sólo capear la crisis sino pagar el total de los servicios de la deuda externa. No casualmente, Juan Vicente Gómez, que gobernaba Venezuela de manera ininterrumpida desde 1908, permanece incólume en el gobierno hasta su muerte en 1935.

Los países tuvieron que enfrentar el desajuste externo generado por la caída del precio y el volumen de las exportaciones, el cierre del mercado de capitales y el desajuste interno producto de la contracción de los ingresos fiscales, con el consiguiente déficit presupuestario imposible de equilibrar con créditos externos, sumado al abandono del patrón oro, que obligó a la intervención en el tipo de cambio.

Esa intervención y regulación tenía en ciertos casos algunos antecedentes a la crisis, por ejemplo, el temprano caso de las

políticas de valorización del café en Brasil, que, desatada la crisis, abroqueló a los sectores no cafetaleros en el golpe de Estado de 1930, liquidando la política del “café con leche”. Sin embargo, significaban medidas aisladas, ya que eran pocas las referencias del archivo del pasado que prometían eficacia para enfrentar un fenómeno nuevo. Algo quedaba muy claro: el liberalismo económico, las fuerzas del mercado libradas a su lógica y el librecambio quedaban descartados. También entonces su correlato político, es decir, las antiguas élites y sus formas de ejercer la dominación política. El denominador común de las políticas y probablemente la ideología dominante del periodo fueron el estadocentrismo, el nacionalismo y una importante cuota de pragmatismo político frente al desafío de unas masas que ya no podían desdeñarse. Las opciones se justificaron ideológicamente *ex post*, tomando de la sinfonía de ideas acuñadas en los años veinte algunas de sus vertientes, descartando formatos políticos extremos. Las ideas se subordinaron al imperio de los empíricos desafíos.

El Estado y su aparato ampliaron sus funciones por medio de instrumentos diseñados para direccionar la economía. Es el caso de las juntas reguladoras de la producción primaria, para fijar precios, restringir las áreas cultivadas, priorizar unos sectores sobre otros en función de la demanda externa (en Argentina las juntas reguladoras de carnes, de granos, de yerba mate; en Brasil el Consejo Nacional del Café). Más central la nacionalización del petróleo en México durante el cardenismo. Un aspecto importante es que estas dependencias estatales son federales, lo que en algún sentido nacionalizaba las políticas y amplificaba la llegada efectiva del Estado. Por poner un ejemplo: las políticas reguladoras del café dejaban de ser un asunto de la burguesía paulista. Eso significaba que el Estado ya no quedaba capturado por las viejas oligarquías y cobraba una mayor autonomía. Otras políticas estaban dirigidas hacia la promoción de actividades industriales como la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y

Petróleo en Uruguay (ANCAP, 1931), la Corporación de Fomento de la Producción en Chile (Corfo, 1939), Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia (1936), la metalúrgica Volta Redonda en Brasil (1941-1946), la espectacular nacionalización petrolera en México (Pemex, 1938).

La sustitución de importaciones fue la herramienta empírica para paliar la crisis. Esa sustitución se asocia en general demasiado rápidamente a la industrialización (modelo ISI), lo que en los años treinta fue más la excepción que la regla. La mayoría de los países de la región iba a transitar el camino de una industrialización, siempre marcada por los parámetros de las economías dependientes, apenas terminada la segunda Guerra Mundial. Una de las primeras reacciones frente a la crisis, sobre todo en aquellas economías donde primaba el monocultivo y generalmente el monomercado, fue la expansión de la agricultura de consumo interno en desmedro de la de exportación.

En países más grandes, con estructuras productivas diversificadas o que contaban con el control nacional de los medios de producción (México, Brasil, Argentina), hacia los años veinte había descrito una expansión fabril e industrial a veces al amparo o complementaria de la economía primario-exportadora. Esa capacidad instalada precedente permitió una expansión industrial alentada por la existencia de un mercado consumidor (que a su vez fue estimulado a través de diversas medidas), por la vía de la derivación de recursos del sector primario al secundario a partir de políticas monetarias y de un manejo y control del cambio y de las tasas de importación y exportación que antes habría sido considerado insensato.

Otras transformaciones acompañaron ese proceso magmático del periodo de entreguerras: el aumento de la población latinoamericana y un cambio que se mostraría estructural en la distribución de la población. Más gente habitaba en las ciudades.

En los años treinta y cuarenta, las migraciones internas hacia las ciudades modificaron la fisonomía y los significados sociales y

políticos ante la presencia masiva de un otro “desconocido”. Un otro “rural”, generalmente campesino, muchas veces con una lengua “distinta” y unos patrones culturales “extraños”. Frente a la pauperización de las economías rurales, la gente se volcó a las ciudades. Si ese proceso era lento y casi imperceptible en los años veinte, luego de la crisis pasó a ser un fenómeno colectivo y estructural (hasta hoy) en las sociedades latinoamericanas. Las ciudades se tiñeron de olores y colores intensos, de comidas y músicas diversas. A primera vista —como muchos análisis contemporáneos señalaron— las sociedades parecieron escindidas, “duales”, incluso desconocidas para sus tradicionales moradores. Luis Alberto Sánchez regresando a Lima desde el exilio escribió: “aquella vez de mi tercer regreso, en 1945, me aturdió el cambio físico de mis conlugareños. Vi muchas mujeres de ojos oblicuos. Muchos ‘injertos’. Muchos rostros aindiados o simplemente indios”.

Además del impacto cultural sobre esas ciudades “europeas”, los migrantes eran pobres. Expulsados de sus minifundios, de las haciendas o plantaciones, esos transeúntes que devinieron muy estables, buscaban en las ciudades trabajo, oportunidades, ascenso social. Traían consigo las ilusiones de un progreso que las mismas oligarquías habían estimulado acerca de los centros urbanos, y pretendían participar de sus beneficios. ¿De qué realidades laborales venían? En Chile todavía existía el inquilinaje, en México aún había “peones acasillados”, en Bolivia pongos, en Perú yanacunas, en Ecuador huasipungos, en Brasil aún perduraban distintas formas de colonato y en la urbana Argentina “cabecitas negras”. ¿Qué tienen en común estas relaciones de trabajo? No eran asalariadas, o no principalmente. Por añadidura, esas formas de trabajo iban acompañadas de micromundos en los que el prebendalismo, el patrimonialismo y el personalismo de hacendados, plantadores, mayordomos, estancieros permeaban el conjunto de las relaciones sociales y de poder.

“Rotos”, “pelados”, huasipungos, cholos, “cabecitas negras”, “caipiras” rodearon unas ciudades que no podían albergarlos

como fuerza de trabajo, pero prometían un presente menos dramático que el lugar de donde provenían. Las ciudades eran el lugar del poder y las masas pugnarían por trabajo y derechos. Favelas, callampas, vecindades, pueblos jóvenes, villas miserias, cantegriles parecían brotar “como hongos” (es ese el despojado significado de la palabra “callampa”) en los cordones de las ciudades en Río, Santiago, Lima, Buenos Aires, Montevideo, y en poco tiempo formaron parte inescindible de ellas.

El incremento de la población urbana fue casi geométrico. En 1900 sólo 10 ciudades latinoamericanas superaban los 100 000 habitantes; hacia 1940 Buenos Aires, México, Río de Janeiro y San Pablo superaban el millón, Santiago de Chile estaba cerca de esa cifra, pero además Lima, Montevideo, Rosario, superaban los 500 000 habitantes. Once ciudades superaban los 200 000 habitantes (Recife, Salvador, Porto Alegre, Avellaneda, Córdoba, La Plata, Guadalajara, La Paz, Bogotá, Caracas y Valparaíso).

Las ciudades se extendieron geográficamente hacia pueblos o suburbios circundantes. Por ejemplo, el área urbana de Santiago de Chile tenía, hacia 1930, 6 500 hectáreas, 30 años después, 20 000. El primer censo de viviendas de 1952 arrojaba datos alarmantes: de la población de la ciudad (alrededor de 200 000 personas), 15% eran ocupantes de hecho y representaban 54% del déficit de agua potable y 57% del déficit de alcantarillado. La canción popular supo retratar ese crecimiento. En la popular tonada *Si vas para Chile* se habla de un pueblito chico, íntimo, que tiene casas bajas y un sauce, y si un viajero llega y pregunta por la amada sobre quien escribe la canción, la encuentra. El pueblito se llama Las Condes y está “entre las sierras y el cielo”, es decir en la falda cordillerana, sigue diciendo esa canción escrita en los años cuarenta por un melancólico chileno en Buenos Aires, y hoy es un barrio residencial de Santiago, eje comercial, financiero y turístico del área metropolitana. Y si alguien pregunta por su amada, pues no la encontrará.

La ciudad de México creció desde los años cincuenta a razón de 36 metros cuadrados diarios. Si en 1940 ocupaba 11 783 hectáreas en 1988 125 000. El Distrito Federal se ha extendido sobre todo el Valle de México. ¿Cómo surgen las vecindades? Según Carlos Monsiváis

a un terreno baldío acuden 20 o 30 familias que se instalan como pueden en chozas precarias a las que por cariño les dicen casa, con piso de tierra y paredes de cartón. El líder les exige dinero para tratar con las autoridades, los colonos entregan lo que pueden, el líder va con el funcionario y le grita recordándole los derechos del pueblo... y el tiempo pasa y si no hay desalojos violentos, 20 o 30 años después han conseguido una o dos escuelas, una iglesia... agua potable, luz eléctrica y algún otro atributo urbano.

Otro tanto la ciudad de San Pablo. Después de la primera Guerra Mundial y mucho más en la década de 1930 se transformó en el área más industrializada de Brasil (generaba más de 50% de la producción industrial del país). La ciudad creció de manera desordenada hacia la periferia generando una grave crisis habitacional y una creciente especulación inmobiliaria en la zona central. Hacia los años cincuenta inicia un proceso de desconcentración del parque industrial, que se transfirió a otros municipios del área metropolitana (el ABC paulista, Guarulhos) y hacia el interior del estado (Campinas, por ejemplo). San Pablo ha sido históricamente un polo de atracción de inmigrantes y, después de 1930, de migrantes internos, sobre todo nordestinos. Paradójicamente, hoy San Pablo es una de las ciudades “nordestinas” más grandes de Brasil: en San Pablo hay más nordestinos que en Sergipe.

Un tramo biográfico es representativo a la vez que excepcional de la migración de millares de nordestinos hacia el litoral paulista. En el año 1952, una madre cansada de la pobreza y la falta de oportunidades que ofrecía el pequeño pueblo del inte-

rior de Pernambuco en el nordeste de Brasil, tomó a sus ocho hijos y junto con otras familias se subió a un camión con destino a San Pablo. Después de 13 días de extenuante viaje se establecieron en Guarujá. Doña Eurídice y sus hijos encontraron trabajos modestos, que les permitían una muy elemental subsistencia; aún así conservaban las esperanzas de mejorar su situación. El séptimo de los hijos trabajó vendiendo naranjas en la calle, como ayudante en una tintorería, de lustrabotas y cadete. Al tiempo ingresó en una metalúrgica del ABC paulista y se inscribió para estudiar tornería en el Servicio Nacional de Aprendizaje Social, escuelas creadas por el varguismo y los sindicatos para la formación obrera de una industria en expansión. Hasta aquí la historia de muchos migrantes nordestinos. La excepción es que el pequeño Luiz Inácio (*Lula*) da Silva en poco tiempo se destacaría en el Sindicato de Metalúrgicos de San Bernardo, en 1980 fundaría el Partido de los Trabajadores y en el año 2002 llegaría a la presidencia de Brasil.

En esas sociedades de masas, el movimiento obrero, antes dominado por ideas anarquistas o anarcosindicalistas, dejaba atrás su “fase heroica” e ingresa en lo que Francisco Zapata llama “fase institucional” de articulación con el Estado. La consolidación del sindicalismo tanto como representante de los trabajadores en el sistema de relaciones industriales como en el sistema político fue un centro gravitatorio de las formas de hacer política del periodo. En los años treinta se crearon centrales obreras de carácter nacional: Confederación General del Trabajo (CGT, Argentina, 1930), Confederación de Trabajadores de México (CTM, México, 1936), Confederación Sindical de Trabajadores Bolivianos (CSTB, 1936), Confederación de Trabajadores de Chile (1931), Confederación de Trabajadores de Cuba (1939), entre otras. En el caso de Brasil, las tradiciones organizativas de los obreros fueron más débiles con anterioridad al varguismo, que llevó a cabo un proceso de sindicalización desde arriba. Las leyes sociales del primer varguismo, diseñadas por el primer

ministro de Trabajo Lindolfo Collor e inspiradas por la *Carta del Lavoro* pusieron a los sindicatos en un dilema bien representativo de muchas realidades en la región. Se partía de la base de una ideología de armonía social y el Estado debía ser ya no mero árbitro sino el generador activo de esa armonía entre capital y trabajo. Así, el sindicato no debía ser el órgano de representación proletaria sino una organización sectorial de cooperación con el Estado. Toda la legislación obrera y social brasileña entre los años 1930 y 1939 regía efectivamente por aquellos sindicatos reconocidos por el Estado; el movimiento obrero tuvo ante sí el dilema que señala Murilo de Carvalho: “libertad sin protección o protección sin libertad”.

El año 1930 suele ser sinónimo de cambios políticos en América Latina. Muchas interpretaciones enfatizan la relación entre los efectos de la crisis capitalista y los golpes de Estado que se suceden en un conjunto de países de la región. Hay, sin embargo, cierto reduccionismo en la relación “crisis económica” y golpes de Estado. Generalmente las interpretaciones se despliegan en este orden: agotamiento del orden primario exportador-muestras de agotamiento de los distintos regímenes oligárquicos. Sin embargo, no en todos los países los cambios son del mismo signo, incluso cuando supongan la intervención directa de las fuerzas armadas o de sectores militares. El golpe de Estado 1930 en Argentina clausuró la experiencia de ampliación de la ciudadanía política. En Perú, el golpe de Estado de la guarnición de Arequipa liderado por Luis Sánchez Cerro terminó con 11 años de gobierno de Augusto B. Leguía y abrió la posibilidad de las primeras elecciones libres y competitivas del Perú, que, aun cuando no lograron quebrar el orden oligárquico, permitieron la creación del primer partido político de masas, el Partido Aprista Peruano.

En Brasil, el golpe de la Alianza Liberal que nucleaba a sectores heterogéneos como el movimiento *tenentista*, las fuerzas armadas, los sectores no cafetaleros más dinámicos de la economía, inauguró la larga experiencia varguista que tiene varios mo-

mentos y muchos significados entre 1930 y el 1954 (gobierno provisional 1934-1934; Estado Novo, 1937-1945, experiencia democrático populista, 1951-1954). En República Dominicana el golpe va a habilitar la larga dictadura de José Leónidas Trujillo. En muchos casos, el denominador común suele ser la intervención de las fuerzas armadas; sin embargo, muy distinto es el caso de Trujillo o José Evaristo Uriburu que el de Marmaduke Grove en Chile, quien en 1932 lidera un golpe de Estado e instaura la muy fugaz “república socialista”. La experiencia, aunque se frustra en no más de un par de semanas, tuvo como epítome y herencia la creación al año siguiente del Partido Socialista que articuló la excepcional experiencia de los frentes populares a partir de 1938. Decimos excepcional, ya que en muchos países de la región en los años treinta y cuarenta regían duras leyes anticomunistas. También en 1933, pero en Cuba, aquellos resistentes a la dictadura de Gerardo Machado llevaron a la presidencia a Ramón Grau San Martín, “el presidente de los estudiantes”. Fue una experiencia efímera, ya que un cuadro militar del ejército supletorio que impuso la intervención norteamericana, Fulgencio Batista, culminaría por articular una opción de poder que se perpetuaría hasta 1959.

En el Uruguay, la “Suiza de América”, el presidente Gabriel Terra produjo un autogolpe de Estado en 1933. Sin las fuerzas armadas pero con el apoyo de las fuerzas policiales, el presidente colorado cerró las cámaras legislativas. La institucionalidad se recupera pocos años después; sin embargo muestra el agotamiento del modelo batllista colorado. Por esos años aparece la revista *Marcha*, emprendimiento de Carlos Quijano, y su secretario de redacción, Juan Carlos Onetti, publica la novela *El pozo*. La erosión de la “sociedad amortiguadora”, como la llamó Carlos Real de Azúa, contaba con nuevas palabras e ideas para repensar formas críticas y alternativas. Otros sombríos paisajes inspiraban asimismo al boliviano Augusto Céspedes un cuento también llamado “El pozo”, incluido en su libro de relatos *Sangre de mes-*

tizos (1936). Metaforizaba allí la crisis de la Guerra del Chaco contra Paraguay, que puso fin al orden oligárquico de Bolivia a partir de la revolución de 1952.

Estos pocos ejemplos evidencian el significado no unívoco que asume la crisis política en la región, pero también un profundo cambio en el orden político, social y económico.

Las salidas a la crisis de dominación fueron entonces dictatoriales, allí donde la intervención norteamericana había dejado sus herencias (Trujillo, Somoza, Hernández Martínez, Ubico, Cárrias Andino), reformistas (Frente Popular chileno), movimientos populistas o nacional populares. Una experiencia singular en el paisaje político de los años cuarenta y cincuenta que conjugó nacionalismo y revolución fue el pasaje del “socialismo militar”, producto de la erosión del poder de los barones del estaño luego de la derrota en la Guerra del Chaco a la revolución de 1952 en Bolivia.

La guerra entre Bolivia y Paraguay por los territorios del Chaco boreal (1932-1935) marcó a fuego la reflexión y la acción política en Bolivia. No era la primera vez que esta era derrotada en una guerra. Antes había ocurrido en la Guerra del Pacífico, cuando perdió la salida al mar que aún hoy reclama. Sin embargo, los ecos traumáticos de esa “estúpida guerra heroica”, más ligada a los intereses de la Standard Oil Company y la Royal Dutch Shell, que a los países contendientes, abrió una brecha para debates, impugnaciones y crudos diagnósticos sobre el orden político. El ensayo de la “generación del Chaco” precipitó en una reflexión sobre la bolivianidad, el Estado, la nación, enmarcado entre la situación dependiente del país y la subordinación de las élites dirigentes, fueran estas militares, políticas o intelectuales. Al fin de la guerra se sucedieron los gobiernos del denominado “socialismo militar” (1936-1939), animados por una ideología difusa, con notas antioligárquicas, nacionalistas y antiimperialistas. Por ejemplo, en 1936 el gobierno de David Toro decretó la caducidad de las concesiones de la Standard Oil, nacionalizó el petró-

leo y creó Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la empresa estatal del petróleo.

Otro tanto la presidencia de Gualberto Villarroel (1943-1946), representante de la logia militar Radepa (Razón de Patria) fundada por un grupo de oficiales prisioneros de la guerra en Paraguay en alianza con el Movimiento Nacional Revolucionario. Durante su gobierno se celebró el Primer Congreso Indígenal Nacional, en el que participaron miles de indígenas que entre otras medidas abolieron esa forma de trabajo colonial, el pongueaje. También por esa época se creó la importante Federación de Mineros de Bolivia, liderada por Juan Lechín. En medio de grandes tensiones políticas, una inesperada alianza entre los “barones del estaño” y el Partido de la Izquierda Revolucionaria (de orientación comunista), impulsó una sangrienta asonada que invadió el Palacio Quemado, sede presidencial, asesinó a Villarroel, lanzó su cadáver por un balcón y lo colgó de un poste de luz de la Plaza Murillo, espectro que habitaría a más de una figura presidencial a partir de entonces.

En la primera mitad de los años cuarenta hubo una intensa labor organizativa de sindicatos obreros y campesinos y de creación de partidos políticos como el Movimiento Nacional Revolucionario (MNR), el Partido de Izquierda Revolucionaria (PIR), el Partido Obrero Revolucionario (POR). Concomitantemente se desarrolló una febril actividad político-intelectual que revisaba e invertía todas las imágenes de la anterior Bolivia: las “Bases y principios de acción del MNR”, redactadas por José Cuadros Quiroga (1942), las radicales “Tesis de Pulacayo” del movimiento obrero minero (1946), las “Tesis de Ayopaya del MNR”, redactadas por Walter Guevara Arze (1946), las obras de Augusto Céspedes, José Cuadros Quiroga y Carlos Montenegro, desde el periódico paiceño *La Calle* (1936-1946), usina ideológica del MNR. Uno de sus directores lo definió como “la columna vertebral al antientreguismo descubriendo el reverso de la política consagrada por presidentes, ministros abogados y pensadores del campamento

minero al que se había reducido el país. *La Calle* con sus ocho páginas fue capaz de enfrentar durante 10 años a la oligarquía y constituirse en la cuna de la Revolución nacional”.

Las frustraciones de la guerra impulsaron a reconsiderar la historia, la economía, el poder, desde la independencia. Los análisis volvían una y otra vez sobre la imagen de un país que no se habían consolidado como nación, construido para el interés de una pequeña oligarquía desarraigada que había secuestrado en su beneficio la riqueza nacional, subordinándola a los intereses extranjeros, la denominada “rosca” con sus terratenientes y barones el estaño, extraviados de la verdadera Bolivia.

Los relatos de la guerra ponían crudamente de manifiesto debilidades, exclusiones y pobreza. Desde el frente de batalla, Augusto Céspedes, cronista del diario *El Universal*, alertaba sobre los avatares y sinsabores de la contienda: el hambre y la avitaminosis de esos soldados antes campesinos y obreros, sus “maldiciones contra el gobierno y los comandos”, los prisioneros caídos ante la sed y el miedo, incluso la desconocida naturaleza del Chaco, donde “hasta los mosquitos parecían aliados del enemigo”. Más allá de sus crónicas, el trabajo que tuvo una gran difusión fue su libro de cuentos *Sangre de mestizos* (1936), en el que analiza pormenorizadamente los contextos de la guerra, expresando con acritud y sarcasmo la fragmentación de Bolivia, el desconocimiento del territorio por parte de las dirigencias políticas, sobre todo el presidente Salamanca, la subestimación hacia el Paraguay. Céspedes narra, por ejemplo, que ante la requisitoria de un diputado al presidente Salamanca sobre que el Paraguay podía llegar al corazón del Chaco en ocho días y al ejército boliviano le tomaría tres meses, Salamanca respondió negligente: “Muy sencillo, salgamos tres meses antes”. Respecto del sitio de Boquerón, momento cumbre de la derrota, denunciaba que mientras el Paraguay había puesto inmediatamente en la línea de fuego 12 000 hombres, “Bolivia con tres millones de habitantes no pudo socorrer durante 23 días a sus 600 soldados sitiados por aquellos”.

Si las élites políticas y militares eran objeto de una insistente y cruda impugnación, otro tanto las élites intelectuales. Sobre todo aquellos que habían puesto en el factor racial las causas del atraso boliviano. Como se ha señalado, uno de sus exponentes era Alcides Arguedas y su libro *Pueblo enfermo*. En un trabajo posterior (*El dictador suicida. 40 años de historia de Bolivia*), Céspedes criticaba el racismo y el pesimismo de la obra de Arguedas: “lógicamente tenía que ser pesimista. Porque esa raza no hallaba otra vía de salida que el estrechísimo callejón de la élite liberal, callejón que concluía en las oficina Patiño Mines”. El esquema racial, biologista o geográfico que otrora explicara los males de Bolivia fue reemplazado por el binomio nacionalismo/colonialismo. En las “Bases y principios de acción inmediata del Movimiento Nacionalista Revolucionario” (1942), redactadas por José Cuadros, las responsabilidades recaían sobre una élite antinacional, alianza de terratenientes y mineros que desde la Guerra Federal (1899) se habían enriquecido a costa del pueblo boliviano. “El progreso, decía el Manifiesto, nos ha hecho daño y no beneficio.”

La misma senda argumentativa era profundizada por Carlos Montenegro en un clásico del pensamiento revisionista boliviano: *Nacionalismo y coloniaje. Su expresión histórica en la prensa de Bolivia* (1943). En ella se proponía revelar “la verdad del devenir boliviano” entre 1780 y 1935, alejándose del criterio “anti-bolivianista” de la historia oficial. Montenegro interpela la historia boliviana a partir de los binomios nación/antinación, dependencia/soberanía. En este esquema, los sectores medios, los trabajadores, mineros y campesinos, auténticos sujetos de la nación boliviana, fueron —desde la independencia— subyugados política, económica e intelectualmente por la oligarquía minero-feudal en alianza con los intereses extranjeros, una “corriente colonial que se transforma de conservadora en liberal franco-inglesa”. Así, la república siguió reproduciendo el esquema social de la colonia desde la exclusión de los mestizos Pedro Domingo

Murillo o Esteban Arze en adelante. Esta “antihistoria” negaba la realidad nacional y, con ella, la transformación social en Bolivia. Para Montenegro “la adopción de la estructura social, económica y aun política del coloniaje después de haberse conquistado la independencia, produce algo como un ataque de parálisis en el cuerpo de la República”. La Guerra del Chaco “reavivó la imagen épica de la bolivianidad”. Sólo era posible sortear esa parálisis a partir de un movimiento insurreccional de todas las clases oprimidas tanto por la oligarquía como por el imperialismo. Revolución nacional que no socialista, asunto que está justificado en otro escrito fundacional de la revolución emenerrista: las “Tesis de Ayopaya” (1946), redactadas por Walter Guevara Arze.

En ellas se planteaba el clásico debate sobre la transformación social en la región: la relación nación-revolución. El documento político está atravesado por la discusión con las tesis socialistas-trotskistas del movimiento obrero (Pulacayo) redactadas por Guillermo Lora. Las “Tesis de Ayopaya” afirmaban que en Bolivia no estaban dadas las condiciones objetivas para una revolución socialista ortodoxa, de allí que fuera necesario realizar una revolución nacional que no negaba la lucha de clases pero no se fundaba en ella. La democracia en Bolivia había sido sino un mito, ya que no podía materializarse en una sociedad donde había extremas desigualdades: “Patiño y cualquier *mamani* como extremos de riqueza y miseria... el niño que se inscribe en Oxford al nacer y el *llokalla* que no aprende a leer porque no hay escuela que se lo enseñe”. La plataforma-programa del MNR proponía un movimiento revolucionario a partir de la unidad de todas las clases oprimidas por el imperialismo (campesinos, obreros, artesanos, clases medias, incluso la burguesía) en un frente nacional antiimperialista. Este nacionalismo antiimperialista, que guarda bastantes puntos de contacto con otros planteos ya recorridos en este libro, devino camino revolucionario en 1952.

La revolución de abril de 1952 cambió radicalmente las estructuras económicas y sociales del país a partir de un importan-

te movimiento de masas campesinas y obreras bajo el liderazgo del MNR. Se nacionalizaron las minas de estaño y se llevó a cabo una importante reforma agraria, se decretó el sufragio universal y se le dio estatus de ciudadanía a los indígenas. Los obreros y mineros alcanzaron una participación directa en las decisiones económicas y políticas del país a través de la Confederación Obrera Boliviana (COB) que llegó a cogobernar el país. Se disolvió ese ejército tan cuestionado por la guerra y se crearon milicias campesinas y obreras, que perduraron hasta el golpe de Estado del general René Barrientos (1964), que ponía fin al impulso revolucionario en el escenario de la Guerra Fría y las nuevas coordenadas imperantes en la región pos-Revolución cubana.

El escenario de incertezas de los años treinta, como hemos desarrollado anteriormente, estaba precedido por ideas políticas alternativas al orden liberal. Revolucionarios, nacionalistas, anti-imperialistas, socialcristianos, integristas habían tejido sus tramas ideológicas buscando sujetos también alternativos a las viejas élites: el “pueblo”, el “frente de clases”, “la nación”, “el ejército”. Esas ideas precipitaron y se condensaron frente a los desafíos que presentó la crisis económica de 1929 y también frente a un proceso de complejización social que comenzaba a delinear en la estructura social esos sujetos que cobraron visibilidad en los años treinta y cuarenta. En cualquier caso, el denominador común fueron los nacionalismos, el Estado como centro y la inclusión social. La gran crisis capitalista profundizó las pragmáticas del poder. Nacionalismos, corporativismos, frentes de clases, populismos (o fórmulas nacional-populares), estaban presentes en la discusión política de los años veinte. Sin embargo en los años treinta, a excepción de Bolivia, la revolución y la democracia demoliberal fueron las salidas más erosionadas por el nuevo escenario regional. Nos interesa resaltar, sin embargo, las rupturas con la década anterior. En los años treinta y cuarenta el poder se articula descartando las ideas políticas más radicales, fueran de las derechas de inspiración fascista o de las izquierdas revo-

lucionarias. Sin embargo, la preventiva frase inspiradora del golpe de Estado en Brasil, “hagamos la revolución antes que la haga el pueblo” enunciada por Antônio Carlos Ribeiro de Andrada, presidente de Minas Gerais, mostraría hasta qué punto soluciones muy empíricas como los denominados populismos tomaban en cuenta la radical transformación del periodo: las masas y el poder.